Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, del **treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro**.

**VISTO** el expediente formado con motivo del Recurso Revisión **03097/INFOEM/IP/RR/2023**, promovido por **XXXXXXX**,a quienen lo sucesivo se le denominará **EL RECURRENTE**, en contra de la respuesta del **Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de Los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán Izcalli denominado OPERAGUA, O.P.D.M.,** que en lo sucesivo se denominará **EL SUJETO OBLIGADO**, se procede a dictar la presente resolución con base en lo siguiente:

**ANTECEDENTES**

**I. De la Solicitud de Información.**

De acuerdo con el acuse de la solicitud el **veintiocho de abril de dos mil veintitrés**, **EL RECURRENTE** presentó a través de la Plataforma Nacional de Trasparencia (PNT) vinculada al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, que en lo subsecuente se denominará **EL SAIMEX,** ante **EL SUJETO OBLIGADO**, la solicitud de acceso a la Información Pública a la que se le asignó el número **00085/OASCUATIZC/IP/2023**, por medio del cual solicitó lo siguiente:

*“1) Copias certificadas de recibos de nomina expedidos para empleados y funcionarios adscritos a la Tercera y Decimo Segunda Regiduría, áreas de deporte, cultura, desarrollo económico, tesorería y secretaria del ayuntamiento, así como del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y Organismo de Agua. De los años 2017 al 2022 solo los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. 2) Copias certificadas de Contratos Laborales suscritos por empleados y funcionarios adscritos a la Tercera y Decimo Segunda Regiduría, áreas de deporte, cultura, desarrollo económico, tesorería y secretaria del ayuntamiento, así como del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y Organismo de Agua. De los años 2017 al 2022 solo los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.”* (Sic).

**MODALIDAD DE ENTREGA:** Vía PNT vinculada al **SAIMEX** y **copias certificadas**.

**II. Solicitud de aclaración**

De las constancias que obran en el expediente electrónico del **SAIMEX,** se advierte que **EL SUJETO OBLIGADO** el **veintiocho de abril de dos mil veintitrés** requirió del particular una aclaración respecto a la solicitud de mérito, la cual versa en lo siguiente:

*“…*

*Folio de la solicitud: 00085/OASCUATIZC/IP/2023*

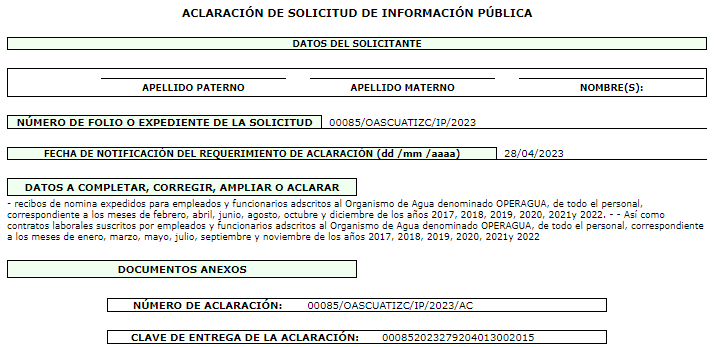
*Con fundamento en el articulo 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se le requiere para que dentro del plazo de diez días hábiles realice lo siguiente:*

*Se previene este acto precise el sujeto obligado del que desea conocer la información requerida a saber: 1) Copias certificadas de recibos de nomina expedidos para empleados y funcionarios adscritos a la Tercera y Decimo Segunda Regiduría, áreas de deporte, cultura, desarrollo económico, tesorería y secretaria del ayuntamiento, así como del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y Organismo de Agua. De los años 2017 al 2022 solo los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. 2) Copias certificadas de Contratos Laborales suscritos por empleados y funcionarios adscritos a la Tercera y Decimo Segunda Regiduría, áreas de deporte, cultura, desarrollo económico, tesorería y secretaria del ayuntamiento, así como del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y Organismo de Agua. De los años 2017 al 2022 solo los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.; lo anterior; bajo la premisa de antender en tiempo y forma su requerimiento de información.*

*En caso de que no se desahogue el requerimiento señalado dentro del plazo citado se tendrá por no presentada la solicitud de información, quedando a salvo sus derechos para volver a presentar la solicitud, lo anterior con fundamento en el artículo 159 de la Ley invocada.*

*ATENTAMENTE. . .”* (Sic).

En consecuencia, el **veintiocho de abril de dos mil veintitrés,** la solicitud de aclaración fue atendida por **EL RECURRENTE** en la que manifestó lo siguiente:

****

**III. Turno de requerimiento del Sujeto Obligado.**

Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el **veintiocho de abril de dos mil veintitrés,** la Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO**, turnó el requerimiento de información al servidor público habilitado que estimó pertinente, a fin de colmar la Solicitud de Acceso a la Información.

**IV. Prórroga.**

De las constancias que obran en **EL SAIMEX,** se advierte que el **veintitrés de mayo de dos mil veintitrés**, **EL SUJETO OBLIGADO** notificó una prórroga de siete días para dar respuesta a la solicitud de información planteada por **EL RECURRENTE**, en los siguientes términos:

*“…Folio de la solicitud: 00085/OASCUATIZC/IP/2023*

*Con fundamento en el artículo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se le hace de su conocimiento que el plazo de 15 días hábiles para atender su solicitud de información ha sido prorrogado por 7 días en virtud de las siguientes razones:*

*Se solicita prorroga, con la finalidad de realizar la correcta integración de los diversos recibos de nomina que obran en poder del área responsable de su atención; bajo la premisa de atender el requerimiento de información registrado bajo el folio: 00085/OASCUATIZC/IP/2023.*

*. . .*

*Responsable de la Unidad de Transparencia” (siC)*

Derivado de lo anterior, es necesario precisar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, contempla la potestad de ampliar el plazo hasta por siete días, en términos del párrafo segundo del artículo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas para hacerlo, y que estas sean aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución; sin embargo, en el caso particular **EL SUJETO OBLIGADO** omitió adjuntar el acuerdo remitido por el Comité de Transparencia por medio del cual haya aprobado la prórroga para atender la presente solicitud.

**V. Respuesta del Sujeto Obligado.**

De las constancias que obran en el **SAIMEX,** se advierte que el **treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés**, **EL SUJETO OBLIGADO** entregó la respuesta a la solicitud de Información Pública del particular en los siguientes términos:

*“Folio de la solicitud: 00085/OASCUATIZC/IP/2023*

*En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:*

*Se emite respuesta a la solicitud de información registrada con el folio 00085/OASCUATIZC/IP/2023 y se adjunta en formato pdf el acuerdo CT/6SE/031/2023 de fecha 17 de mayo de 2023, en la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de Operagua Izcalli 2023; en el que se aprueba la consulta directa de la información conforme al calendario de consulta en razón a los argumentos señalados por el área responsable, así como entrega de los documentos en su versión pública.*

*ATENTAMENTE*

*. . .”* (Sic).

Advirtiendo de dicha respuesta, que **EL SUJETO OBLIGADO** acompañó el archivo electrónico ***085 2023.pdf,*** el cual de su contenido se advierte lo siguiente:

* Oficio con número DAF/297/2023 del treinta de mayo de dos mil veintitrés, por medio del cual el Director de Administración y Finanzas OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M, refiere que por lo que hace a los recibos de nómina correspondiente a los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, se encuentra disponible la información en las oficinas que ocupa la Coordinación de Recursos Humanos, señalando para entonces la ubicación y el servidor público que le atenderá. Por otro lado, refirió respecto a los contratos laborales peticionados por el particular, que dicha información no obraba en los archivos del ente recurrido, ya que, ese organismo no celebra contratos laborales con el personal y que la relación de trabajo entre las instituciones públicas y sus servidores públicos se entiende establecida como consecuencia de la prestación personal subordinada del servicio y la percepción de un sueldo, hecho que se documentó con la expedición de los recibos de nómina.
* Oficio con número DAF/268 BIS/2023 del doce de mayo de dos mil veintitrés, por medio del cual el Director de Administración y Finanzas OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M, solicitó al Suplente del Titular de la Unidad de Transparencia y Presidente del Comité de Transparencia del ente recurrido, que fuera presentado en la próxima sesión del Comité de Transparencia el cambio de modalidad para la entrega de información solicitada.
* Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO,** por medio del cual se aprobó el cambio de modalidad a consulta directa (in situ) así como la clasificación de información como confidencial respecto de los documentos concernientes a los recibos de nómina.

**VI. Del Recurso Revisión.**

Inconforme con la respuesta, el **primero de junio de dos mil veintitrés**, **EL RECURRENTE** interpuso el Recurso Revisión sujeto del presente estudio, el cual fue registrado en **EL SAIMEX,** y se le asignó el número de expediente **03097/INFOEM/IP/RR/2023,** en el que señaló como:

**Acto impugnado:**

*“ENTREGA DE 1) Copias certificadas de recibos de nomina expedidos para empleados y funcionarios adscritos al Organismo de Agua. De los años 2017 al 2022 solo los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. 2) Copias certificadas de Contratos Laborales suscritos por empleados y funcionarios adscritos a la Tercera y Decimo Segunda Regiduría, áreas de deporte, cultura, desarrollo económico, tesorería y secretaria del ayuntamiento, así como del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y Organismo de Agua. De los años 2017 al 2022 solo los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.; lo anterior; bajo la premisa de antender en tiempo y forma su requerimiento de información.”* (sic).

Así como **Razones o motivos de inconformidad** lo siguiente**:**

*“Se solicito copias certificadas y en el acuerdo del organo de gobierno en materia de transparencia especifican la consulta presencial, entendiendose que por motivos de traslado y uso de tecnologias de la informacion se realiza la peticion especifica, la cual es ignorada afectando asi mi derecho para acceder a la informacion.”* (Sic).

**VII. Del turno del Recurso Revisión.**

El **primero de junio de dos mil veintitrés**, el medio de impugnación que se trata se envió electrónicamente al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios; por lo que, con fundamento en el artículo 185, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se turnó mediante **EL SAIMEX**, a la **Comisionada** **Sharon Cristina Morales Martínez** a efecto de decretar su admisión o desechamiento.

**a) Admisión del Recurso Revisión.**

De las constancias del expediente electrónico del **SAIMEX**, se advierte que el **seis de junio de dos mil veintitrés**, se notificó la admisión a trámite del Recurso Revisión que nos ocupa; así como la integración del expediente respectivo, mismo que se puso a disposición de las partes, para que en un plazo máximo de siete días hábiles conforme a lo dispuesto por el artículo 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; **EL RECURRENTE** manifestara lo que a su derecho conviniera, a efecto de presentar pruebas o alegatos y, en su caso, **EL SUJETO OBLIGADO** rindiera su correspondiente Informe Justificado.

**b) Manifestaciones.**

Conforme a las constancias que obran en el **SAIMEX**, se desprende que atento a lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, dentro del término legalmente concedido al **RECURRENTE**, éste último remitió un archivo electrónico denominado ***“manifesta.pdf”*** del que se advierte, entre otras, las siguientes manifestaciones:

*“…*

*Es por ello que no comprendo la Azaña con el que un gobierno municipal realiza acciones como clasificar o decretar la clasificación de información como reservada o confidencial, sin tener un criterio homogéneo sobre la información, a su vez que al realizar este tipo de acciones nos encontramos en una clara violación al acceso de información pública toda vez que los recibos son un claro ejemplo del destino de los recursos públicos.*

*Aunado al uso de preceptos legales a modo para garantizar el no entregar información considerando que el costo de hacerlo supera los 200,000 pesos poniendo en una clara desventaja al ciudadano frente al gobierno por el pago excesivo para acceder a dicha información y que el propio gobierno puede contar con los mecanismos digitales o la estrategia correcta para la gestión de la información.*

*Y que puede configurarse como una herramienta clave para violaciones a derechos humanos”.*

*Más allá de aquellas facultades como Ciudadanos para solicitar información, el gobierno municipal debería hacer uso de las tecnologías para garantizar el acceso a la información para diversos casos que tienen que ver con transparentar el uso del recurso público.*

*No me queda más que solicitar al Comisionado su valioso apoyo para poder hacer valer los derechos de acceso a la información como ciudadano y que el gobierno municipal no quede impune.*

*…”* (Sic).

Por su parte, es importante señalar que **EL SUJETO OBLIGADO** no rindió su Informe Justificado.

**c) De la ampliación para resolver el Recurso de Revisión:**

El **tres de agosto de dos mil veintitrés**, se acordó ampliar el plazo para resolver el Recurso de Revisión en estudio, por un periodo de hasta quince días hábiles, de conformidad con el artículo 181, tercer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Este Órgano Garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos dentro del primer semestre del año dos mil veintidós, que, en comparación con los recibidos el año pasado dentro del mismo periodo, se ha incrementado aproximadamente un 400%, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

Por ello, es menester precisar que si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.

En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

a) Complejidad del asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.

b) Actividad Procesal del interesado: Acciones u omisiones del interesado.

c) Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.” consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.

**d) Cierre de Instrucción.**

Una vez analizado el estado procesal que guarda el expediente, el **treinta de enero de dos mil veinticuatro**, la **Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez** acordó el cierre de instrucción; así como, la remisión del mismo a efecto de ser resuelto, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 fracciones VI y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CONSIDERANDOS**

**PRIMERO.** **Competencia**.

Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente Recurso Revisión, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; ordinal 2, fracción II, 13, 29, 36, fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 9, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO. Interés.**

El Recurso Revisión fue interpuesto por parte legítima, en atención a que se presentó por **EL RECURRENTE,** quien es la misma persona que formuló la solicitud de acceso a la Información Pública al **SUJETO OBLIGADO,** pues para ello, es necesario que el particular ingrese al **SAIMEX** mediante la utilización de su clave de usuario y contraseña.

**TERCERO. Oportunidad.**

El Recurso de Revisión fue interpuesto dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al que **EL RECURRENTE** tuvo conocimiento de la respuesta impugnada; tal y como, lo prevé el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que establece:

***“Artículo 178****. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, Recurso de Revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta.*

*A falta de respuesta del sujeto obligado, dentro de los plazos establecidos en esta Ley, a una solicitud de Acceso a la Información Pública el recurso podrá ser interpuesto en cualquier momento, acompañado con el documento que pruebe la fecha en que presentó la solicitud.*

*En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el Recurso de Revisión al Instituto a más tardar al día siguiente de haberlo recibido.”* (Sic).

En esa tesitura, atendiendo a que **EL SUJETO OBLIGADO** notificó la respuesta a la solicitud de Acceso a la Información Pública el **treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés**, así, el plazo de quince días hábiles que el artículo 178 de la Ley de la materia otorga al hoy **RECURRENTE** para presentar el respectivo Recurso de Revisión, transcurrió del **primero al veintiuno de junio de dos mil veintitrés**, sin contemplar en el cómputo los días sábados y domingos, considerados como días inhábiles, en términos del artículo 3, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; de igual forma, por corresponder a días de suspensión de labores de conformidad con el Calendario Oficial en materia de Transparencia aprobado por el Pleno en fecha catorce de diciembre de dos mil veintidós.

Por tanto, se advierte que el Recurso de Revisión que nos ocupa, se interpuso el **primero de junio de dos mil veintitrés**, por tal razón éste se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en el precepto legal citado en el párrafo anterior.

**CUARTO. Procedibilidad.**

Este Órgano Garante considera importante precisar que conforme al artículo 180, fracción II, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual prevé que cuando las solicitudes se presenten de manera electrónica no es requisito indispensable el proporcionar el nombre, tal como se muestra a continuación:

***“Artículo 180.*** *El recurso de revisión contendrá:*

***…***

***II. El nombre del solicitante que recurre*** *o de su representante y, en su caso, …*

***En caso de que el recurso se interponga de manera electrónica no será indispensable que contengan los requisitos establecidos en las fracciones II****, IV, VII y VIII.****”***

*(Énfasis añadido)*

Con fundamento en el precepto legal antes citado, el Recurso de Revisión materia del presente asunto, se interpuso de manera electrónica y, por ende, no es necesario que contenga determinados requisitos, entre ellos, el nombre del **RECURRENTE;** en ese sentido en el presente caso, al haber sido presentado el Recurso de Revisión vía **SAIMEX**, dicho requisito resulta innecesario.

Lo anterior es así, pues el artículo 15 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios prevé que, toda persona tendrá acceso a la información sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, de lo que se infiere que para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, **el nombre no es un requisito *sine qua non*** para que los particulares ejerzan el derecho de acceso a la información pública, pues por el contrario la Ley de la materia señala en su artículo 155, párrafo segundo la posibilidad de que las solicitudes de información sean anónimas, al utilizar un nombre incompleto o, inclusive un seudónimo.

Aunado a lo anterior, cabe precisar que los artículos 6, Apartado A, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, párrafos trigésimo, trigésimo primero y trigésimo segundo, fracciones I, III, IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, garantizan el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, disponen que toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública.

Asimismo, se estima que el requisito relativo al nombre del **RECURRENTE** no constituye un supuesto indispensable de procedibilidad de los Recursos de Revisión, en términos de los artículos 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1 párrafos segundo y tercero, 6 apartado A, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, párrafo vigésimo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, debido a que el acceso a la información pública es un Derecho Humano que no requiere legitimación en la causa, sino únicamente basta con que el solicitante se encuentre legitimado en el procedimiento de recurso de revisión, circunstancia que se acredita con las constancias electrónicas del expediente, de las que se desprende que **EL RECURRENTE** es la misma persona que realizó la solicitud de acceso a la información pública que ahora se impugna.

Es así que, para el estudio de la materia sobre la que se resuelve el presente Recurso de Revisión, resulta intrascendente conocer el nombre de la persona que lo hubiere promovido, en virtud de que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, reconocen la prerrogativa de los individuos para que no resulte necesario la acreditación de un interés o justificar la utilización de la información; siendo ocioso realizar dicho análisis; toda vez que, se limitaría el ejercicio de un Derecho Humano, como el Derecho de Acceso a la Información Pública, por una cuestión procedimental.

**QUINTO. Estudio y resolución del asunto.**

Con la finalidad de estar en posibilidad de dictar el fallo correspondiente conforme a derecho, el presente estudio se basará en el contenido íntegro de las actuaciones que del expediente electrónico que obra en EL SAIMEX, tomando en consideración los elementos aportados por las partes y respetando en todo momento al principio de máxima publicidad consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y demás leyes aplicables en la materia; así como en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.

En primer lugar, es importante señalar que **EL RECURRENTE** en el ejercicio de su derecho de Acceso a la Información solicitó copias certificadas de los recibos de nómina de servidores públicos adscritos a la Tercera y Decima Segunda Regiduría, así como las áreas de Deporte, Cultura, Desarrollo Económico, Tesorería y Secretaria del Ayuntamiento, de igual forma del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y Organismo de Agua, de los años 2017 al 2022 solo los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre.

Por otro lado, también requirió los contratos laborales de los servidores públicos adscritos a la Tercera y Decima Segunda Regiduría, así como las áreas de Deporte, Cultura, Desarrollo Económico, Tesorería y Secretaria del Ayuntamiento, de igual forma del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y Organismo de Agua, de los años 2017 al 2022 solo los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.

Sin embargo recordemos que el **SUJETO OBLIGADO** al que fue realizada la solicitud se trata sobre el Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de Los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán Izcalli denominado OPERAGUA, O.P.D.M, por lo que, al realizar una aclaración el ente recurrido sobre la totalidad de la información solicitada, **EL RECURRENTE** mediante atención a la solicitud de aclaración, corrigió la información peticionada, precisando entonces requerir lo siguiente:

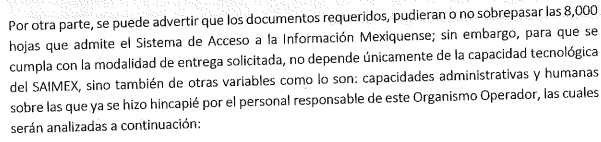
* *“****Recibos de nómina*** *expedidos para empleados y funcionarios adscritos al Organismo de Agua denominado OPERAGUA, de todo el personal, correspondiente a los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. - - Así como* ***contratos laborales*** *suscritos por empleados y funcionarios adscritos al Organismo de Agua denominado OPERAGUA, de todo el personal, correspondiente a los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021y 2022”* (Sic).

Por lo que, de lo anterior podemos advertir que fue requerida la misma información que en la solicitud primigenia, con la novedad de que al corregir la solicitud de información, destinó lo peticionado únicamente al hoy **SUJETO OBLIGADO.**

Una vez precisado lo anterior, cabe traer a contexto que, **EL SUJETO OBLIGADO** en su respuesta refirió como primer punto, respecto a los recibos de nómina una imposibilidad administrativa y humana para la entrega de los mismos mediante **SAIMEX,** por lo que sugirió un cambio de modalidad a consulta directa (in situ), el cual fue aprobado por el Comité de Transparencia mediante la celebración de la Sexta Sesión Ordinaria, así como también fue motivo de aprobación la versión pública de aquellos recibos de nómina; por último y no menos importante, **EL SUJETO OBLIGADO** proporcionó también en la respuesta, el calendario para la consulta, haciendo del conocimiento al particular el Área Administrativa, Domicilio, Día de la Consulta, Horario y Servidor Público Habilitado que le atendería para la consulta de la información.

Respecto al segundo punto solicitado por el particular, **EL SUJETO OBLIGADO** le hizo del conocimiento que al no realizar **contratos** **laborales** con los servidores públicos adscritos al ente recurrido, no contaba con documentos que tuvieran por colmado esta parte del requerimiento del particular.

Por lo que, derivado de dicha respuesta, tomando en consideración que respecto a los recibos de nómina, **EL SUJETO OBLIGADO** sugirió un cambio de modalidad, se advierte que fue enviada el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, la cual refiere las manifestaciones vertidas por la Dirección de Administración para el cambio de modalidad, tal y como se advierte a continuación:



En ese contexto, cabe recordar que el artículo 158 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, dispone que cuando la información implique un análisis, estudio o procesamiento de documentos, cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades **técnicas, administrativas y humanas** del **SUJETO OBLIGADO**, deberá poner la información a disposición del Solicitante en **consulta directa.**

Expuesto lo anterior, es importante traer a contexto lo señalado en el artículo 164 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, pues de conformidad con el extracto del Acta del Comité de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO** que se advierte de la imagen anterior, podemos observar que el propio ente recurrido señaló que no depende únicamente la capacidad tecnológica para acreditar un cambio de modalidad sino también acreditar la posibilidad administrativa y humana para el respectivo cambio de modalidad, por lo que al recordar lo señalado en el artículo 164 previamente referido es de observarse lo siguiente:

***“Artículo 164. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad solicitada, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.”***

Del precepto legal en cita podemos observar que se debe privilegiar la modalidad elegida por el particular, en este caso es preciso señalar que fue requerida la información vía **SAIMEX** y en **copias certificadas,** por lo que cualquier impedimento para la entrega de información en esas vías solicitadas, se debió de acreditar fundando y motivando la falta de cumplimiento a dicha elección del particular.

Como paréntesis, es preciso señalar de que se habla cuando se dicta una debía fundamentación y motivación para la entrega de información en las vías solicitadas por los particulares, al respecto, el máximo tribunal del país ha establecido jurisprudencia respecto a qué debe entenderse por fundamentación y motivación, en los siguientes términos:

*“****FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.*** *La* ***debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento****.*

***…”*** *(Sic)*

Criterio que nos permite señalar que surte la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y cuenta con la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho.

Más aún, a través de diversa jurisprudencia dictada por el Poder Judicial de la Federación se sostiene que la finalidad de la fundamentación o motivación es la de explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión de la autoridad:

***“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN****. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la* ***fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa****. Por tanto,* ***no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa****, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente****, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción****.”* *(Sic)*

En consecuencia, la fundamentación y motivación implica que, en el acto de autoridad, además de contenerse los supuestos jurídicos aplicables se expliquen claramente, por qué, a través de la utilización de la norma se emitió el acto. De este modo, la persona que se siente afectada con el acto de autoridad, pueda impugnar la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.

Acorde con lo anterior, es de señalar que **EL SUJETO OBLIGADO** refirió mediante respuesta primigenia la imposibilidad administrativa y humana para entregar los archivos requeridos por el particular, motivo por el cual, el Comité de Transparencia avaló el cambio de modalidad para la entrega de información, sin embargo no se advierte que haya sido analizada la imposibilidad técnica, ofreciendo mayores elementos para referir que **SAIMEX** se encuentra imposibilitado para cargar la información que solicitó el particular.

Una vez expuesto lo anterior, cabe resaltar que si bien, en respuesta primigenia **EL SUJETO OBLIGADO** proporcionó el nombre de la unidad administrativa así como del servidor público que le atenderá, la fecha, hora de entrega, todos esos elementos no terminan de cumplimentar el requisito señalado en la Ley, pues de acuerdo a lo antes expuesto recordemos que se debe fundar y motivar las razones suficientes para el cambio de modalidad.

Por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 49, fracción XII[[1]](#footnote-1), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se advierte que el Acta del Comité de Transparencia remitido por el ente recurrido no cumple con la debida fundamentación y motivación para aprobar el cambio de modalidad, ello se insiste que tal y como acaba de ser expuesto no se cumplimentó el requisito de señalar el impedimento tecnológico (**SAIMEX**) para la entrega de información de manera digital, por lo que es de recordar que, es obligación del responsable de la Unidad de Información verificar que los archivos sean entregados por la modalidad señalada por el particular.

Es por las manifestaciones vertidas por **EL SUJETO OBLIGADO** en respuesta primigenia, que generaron la inconformidad del particular, refiriendo para tal efecto como **Razones o Motivos de Inconformidad** lo siguiente**:**

*“Se solicito copias certificadas y en el acuerdo del organo de gobierno en materia de transparencia especifican la consulta presencial, entendiendose que por motivos de traslado y uso de tecnologias de la informacion se realiza la peticion especifica, la cual es ignorada afectando asi mi derecho para acceder a la informacion.”* (Sic).

Hasta aquí, valdría la pena realizar una aclaración para que pueda entenderse el motivo de lo que se habrá de resolver en el presente asunto, por lo que es importante para este Órgano Garante advertir que **EL RECURRENTE** se duele por el cambio de modalidad para la entrega de información; sin embargo, es de señalar que al ser requeridas copias certificadas, éstas últimas tienen que ser entregadas de manera física al particular, de tal forma que el acudir a recoger dichas copias certificadas se vuelve una opción.

Dicho lo anterior, partiendo de la descripción clara y precisa de la información solicitada donde fue requerido en **copias certificadas** los recibos de nómina así como los contratos laborales de distintas fechas este Instituto se encuentra en una disyuntiva que, para el correcto acceso a la información que hoy reclama el particular y del análisis vertido en párrafos anteriores, el hecho de que los particulares no sean expertos en la materia no es motivo de oposición para la entrega de información pública.

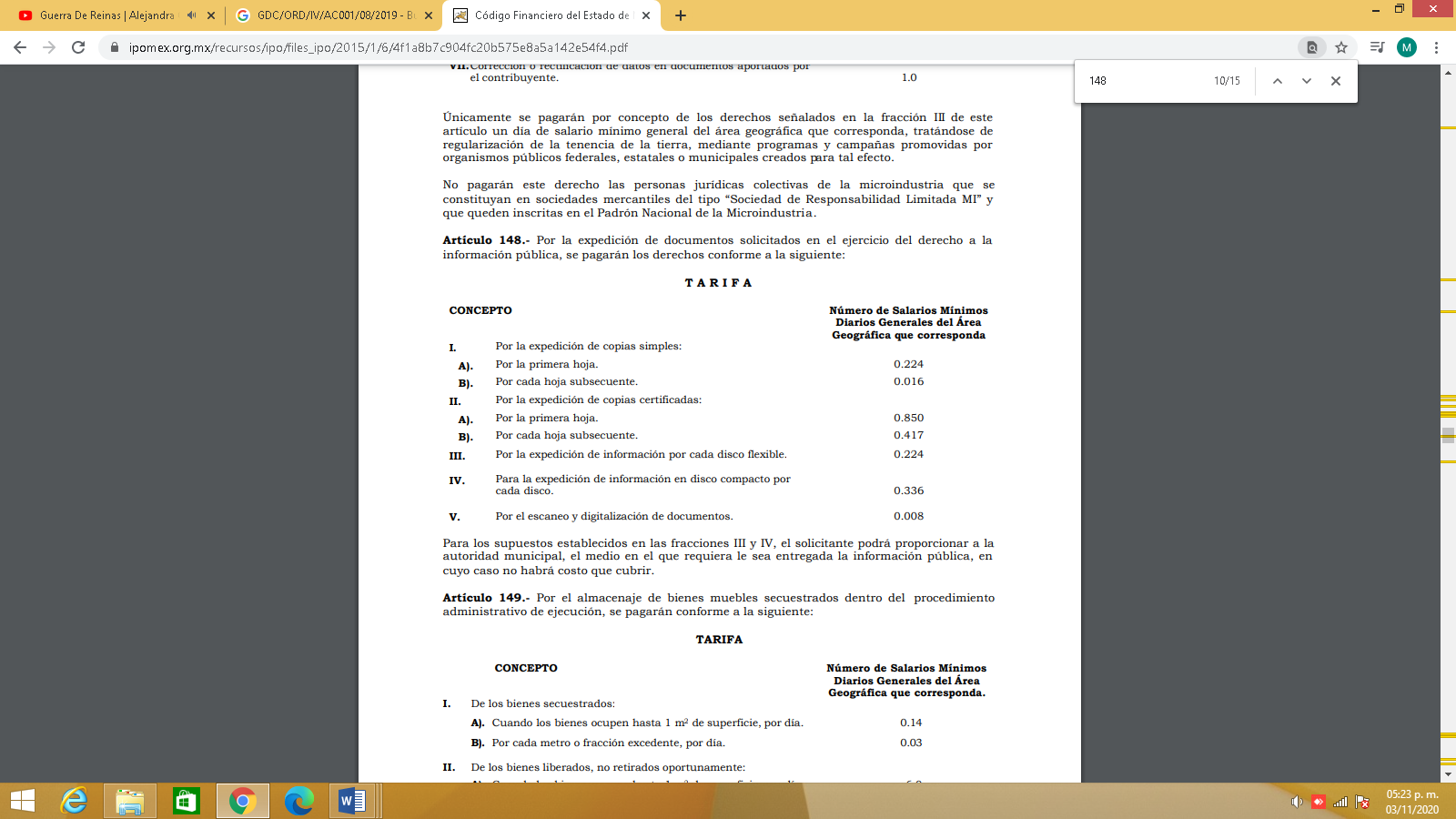
En tanto que, es de suma importancia hacer del conocimiento al **RECURRENTE,** que la emisión de copias certificadas tal y como fue señalado a la literalidad de la solicitud, la información a través de **Copias Certificadas devienen con costo,** misma que se encuentra prevista en el artículo 174 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, la cual dispone en caso de existir costos para obtener la información deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de la certificación de los documentos.

Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse, en su caso, en el Código Financiero del Estado de México y Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables, las cuales se publicarán en los sitios de internet de los Sujetos Obligados. En su determinación se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Lo anterior, tomando en cuenta lo dispuesto por el Código Financiero del Estado de México y Municipios, el cual regula la actividad financiera estatal y municipal, entendiendo a dicha actividad la que comprende la obtención, administración y aplicación de los ingresos públicos, así como lo conducente a la transparencia y difusión de la información financiera relativa a la presupuestario, ejercicio, evaluación y rendición de cuentas, en apego a las disposiciones aplicables en la materia.

Por tanto, se tiene que el artículo 7, del Código referido establece que, para cubrir el gasto público y demás obligaciones a su cargo, el Estado y los Municipios percibirán en cada ejercicio fiscal los impuestos, derechos, aportaciones de mejoras, productos, aprovechamientos, ingresos derivados de la coordinación hacendaria, e ingresos provenientes de financiamientos, establecidos en la Ley de ingresos. Asimismo, el artículo 9 en su fracción II define a los derechos como las contraprestaciones establecidas en este Código que deben pagar las personas físicas y jurídicas colectivas, por el uso o aprovechamiento de los bienes del domino público de la Entidad, así como por recibir servicios que preste, el Estado, sus organismos y Municipios en funciones de derecho público.

Así, se tiene que el cobro por la certificación de los documentos a entregar, es un ingreso al que tienen derecho los municipios y su destino es cubrir el gasto público y demás obligaciones a su cargo, toda vez que es una ganancia lícita que se debe obtener con el cumplimiento de la obligación del Recurrente a realizar el pago establecido en el artículo 148 del Código Financiero.



**Del precepto legal en cita, se advierten los costos que debieron observarse y realizar el respectivo cobro.**

Dicha modalidad de entrega en copias certificadas no implica que se tenga que acudir ante un notario o fedatario público, sino que faculta a los servidores públicos para que expidan certificaciones de los documentos solicitados que obran en los archivos de las dependencias o entidades en copia simple u original según sea el caso.

Al respecto, el Poder Judicial de la Federación ha establecido que los servidores públicos tendrán la facultad para la expedición de copias respecto de los documentos que obren en sus archivos, y que el derecho de los particulares de solicitar copias es respecto de los documentos que obran en las oficinas públicas.

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha establecido el derecho de los particulares de solicitar copia o testimonio de documentos o piezas que obran en las oficinas públicas y por ende la obligación de las autoridades, de expedir las copias certificadas que les soliciten.[[2]](#footnote-2)

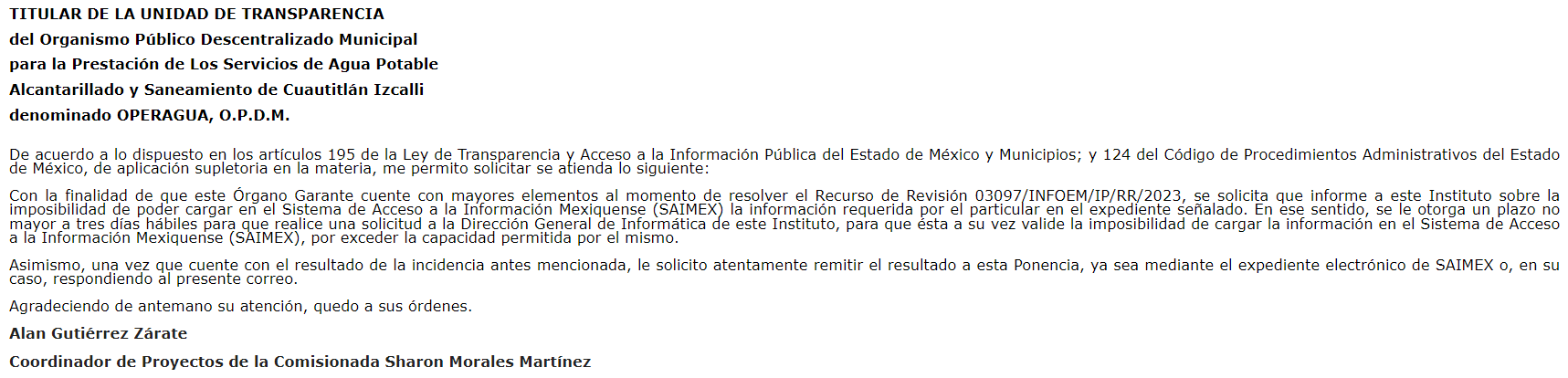
Sirve de fundamentación a lo antes expresado, el criterio 2/09 del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales que se transcribe a continuación para la claridad de las razones que justifican la actuación de este órgano garante.

***“Copias certificadas. La certificación prevista en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental corrobora que el documento es una copia fiel del que obra en los archivos de la dependencia o entidad.*** *El artículo 40, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé la posibilidad de que el solicitante elija que la entrega de la información sea en copias certificadas. Por su parte, el artículo 44 de la misma ley establece, entre otras cuestiones, que las respuestas a solicitudes se deberán atender en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado. Considerando que el artículo 1° de la ley en cita tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de las autoridades, la certificación a que se refiere la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene por efecto constatar que la copia certificada que se entrega es una reproducción fiel del documento -original o copia simple- que obra en los archivos de la dependencia o entidad requerida. En ese orden de ideas, la certificación, para efectos de acceso a la información, a diferencia del concepto que tradicionalmente se ha sostenido en diversas tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tiene como propósito que el documento certificado haga las veces de un original, sino dejar evidencia de que los documentos obran en los archivos de los sujetos obligados, tal cual se encuentran.”*

Ahora bien, para la entrega de la información certificada tal y como fue solicitada por el particular en el asunto que nos ocupa, debemos tener en cuenta que los Lineamientos para la Recepción, Trámite y Resolución de las solicitudes de acceso a la información pública, así como de los Recursos de Revisión que deberán observar los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, disponen en el numeral treinta y ocho incisos e), f) y h), establecen que en el caso de que la información se haya solicitado en una modalidad que sea técnicamente factible y que constituya un costo de reproducción, **se deberá informar al particular el costo total, el lugar y procedimiento para realizar el pago correspondiente; y los horarios en los cuales estará a su disposición la información solicitada.**

Consecuentemente, a colación de todo lo antes expuesto, éste Órgano Garante señala que de las dos modalidades elegidas por el particular (**Copias certificadas** [con costo] y vía **SAIMEX**) para recibir la información solicitada, ordena al **SUJETO OBLIGADO** a la entrega vía **SAIMEX** así como a proporcionar los pasos a seguir para acceder a la información en **copias certificadas,** teniendo claro que en cumplimiento a la presente Resolución, deberá informar al particular, en caso de aún requerir la información en **copias certificadas**, el costo total, el lugar y procedimiento para realizar el pago correspondiente; y los horarios en los cuales estará a su disposición la información solicitada, esto se insiste, en razón de que el particular, aún requiera la obtención de la información en la modalidad de **copias certificadas mismas que tal como quedo impactado, éstas últimas devienen con costo**.

Por lo anterior, cabe recordar que **EL SUJETO OBLIGADO** manifestó mediante el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia la imposibilidad administrativa y humana para la entrega de información mediante **SAIMEX**; por lo que este Órgano Garante procedió a contactar al ente recurrido vía correo electrónica para invitarlo a realizar la indecencia a través de la Dirección General de Informática y así notificar la imposibilidad técnica para remitir la información vía **SAIMEX**, lo anterior de conformidad con la siguiente documental:



Sin embargo, excedido el tiempo ofrecido al **SUJETO OBLIGADO** para la debida tramitación de la incidencia en comento, es dable señalar que éste último no acreditó la imposibilidad técnica para la entrega de información mediante **SAIMEX,** razón por la cual, este Órgano Garante concluye que deberá ser remitida la información a través de las dos vías solicitadas por el particular (Vía **SAIMEX** y **copias certificadas con costo).**

Una vez delimitado la improcedencia sobre el cambio de modalidad ofrecido por **EL SUJETO OBLIGADO,** cabe señalar que respecto al primer tema solicitado por el particular, el cual trata sobre los recibos de nómina expedidos a los servidores públicos adscritos al hoy ente recurrido, correspondiente a los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, este Órgano Garante realiza el siguiente análisis:

Respecto a los recibos de nómina, el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establece que los trabajadores al servicio del Estado, como los miembros de los Ayuntamientos, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su empleo, cargo o comisión, que será determinada en el presupuesto de egresos que corresponda.

En orden de ideas, el artículo 3°, fracción XXXII, del Código Financiero del Estado de México y Municipios establece que la remuneración consiste en los pagos hechos por concepto de sueldo, compensaciones, gratificaciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones, en especie y cualquier otra percepción o prestación que se entregue al servidor por su trabajo.

Da la misma manera, el Anexo IV.5 Glosario de Términos, del Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal dos mil veinte, establece que la remuneración es la percepción de un trabajador o retribución monetaria que se da en pago por su servicio o actividad desarrollada.

En ese contexto, el artículo 70, fracción VIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 92, fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establece que los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada, las remuneraciones brutas y netas de todos los servidores públicos, que incluya todas las percepciones, entre las cuales, se encuentran los sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos, entre otros.

Además, el Anexo IV.2 Clasificación por objeto del gasto, del Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, establece que los Presupuestos de Egresos Municipales, se tendrán que generar, conforme al “Clasificador por Objeto del Gasto”, el cual se conforma de diversos capítulos, entre los cuales, se encuentra el **1000 Servicios Personales**, **que agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como el sueldo, salarios, dietas, honorarios, prestaciones, obligaciones laborales, entre otras.**

Ahora bien, respecto al documento solicitado, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en su artículo 220 K, fracciones II y IV, establece los documentos que tiene la obligación de conservar el Sujeto Obligado, entre los que se encuentra los **recibos de pago de salarios o las** **constancias documentales del pago de sueldos,** cuando sea por depósito o mediante información electrónica; así como los recibos o constancias de depósito o del medio de información magnética o electrónica que sean utilizadas para el pago de salarios, prima vacacional, aguinaldo y demás prestaciones.

Lo anterior, toma sustento en la Tesis aislada número I.6o.T.154 L (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada el abril de dos mil dieciséis, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en su Libro 29, Tomo III, misma que señala lo siguiente:

***“RECIBOS DE PAGO******EMITIDOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS SIN FIRMA DEL TRABAJADOR. SON VÁLIDOS PARA ACREDITAR LOS CONCEPTOS Y MONTOS QUE EN ELLOS SE INSERTAN (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 776, FRACCIONES II Y VIII, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, A LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO).*** *En materia burocrática los recibos de pago que se obtienen por medios electrónicos son válidos para acreditar los conceptos y montos que en ellos se insertan, en términos del artículo 776, fracciones II y VIII, de la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; lo anterior por no ser contrarios a la moral ni al derecho, por lo que la falta de firma de esos documentos, no les resta convicción plena, porque el avance de la ciencia y la necesidad propia de evitar pagos en efectivo, han impuesto al patrón-Estado pagar a sus trabajadores por la vía electrónica; por tanto, si para demostrar las percepciones y montos los recibos correspondientes se exhiben de esta forma sin prueba en contrario que los desvirtúe, entonces no hay razón jurídica para condicionar su eficacia probatoria a que deban adminicularse con otras pruebas; resolver en contrario, implicaría desatender el artículo 137 de la referida Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.”*

De la tesis transcrita, se desprende que **en materia burocrática** **los recibos de pago acreditan los conceptos y montos que en ellos se insertan**, y constituyen prueba para demostrar las percepciones y montos que reciben los servidores públicos.

En ese orden de ideas, los Lineamientos para la Integración del Informe Trimestral de los Sujetos de Fiscalización Municipales para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, entre los formatos que maneja en el **Módulo 4**, se advierte que se encuentran **los Comprobantes por concepto de Nómina**, mismos que serán entregados al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, que contiene todas las percepciones y deducciones que recibe cada servidor público.

Una vez delimitada la obligatoriedad para contener en los archivos del **SUJETO OBLIGADO** los recibos de nómina peticionados por el particular de manera electrónica, se deja claro que el ente recurrido puede proporcionar la información peticionada por **EL RECURRENTE.**

Por otro lado, respecto a los contratos laborales solicitados por el particular, recordemos que **EL SUJETO OBLIGADO** refirió que no genera contratos laborales con los servidores públicos, enmarcando en su respuesta que la relación laboral se contrae de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, sin embargo en otras palabras **no proporcionó algún documento análogo que diera cuenta de la acreditación formal y legal de la relación laboral del servidor público con EL SUJETO OBLIGADO,** por lo tanto respecto a esta parte de la respuesta se tienen las siguientes consideraciones:

Como primer punto, es necesario traer a contexto la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México, que tiene por objeto regular las relaciones de trabajo comprendidas entre los poderes públicos del Estado y los Municipios, y sus respectivos servidores públicos[[3]](#footnote-3), que se entienden establecidas mediante **nombramiento**, **formato único de movimiento de personal**, **contrato** o por cualquier otro acto que tenga como consecuencia la prestación personal subordinada del servicio y la percepción de un sueldo, de conformidad con el artículo 5 de la Ley en análisis, que reza de la siguiente manera:

“***Artículo 5.-*** *La relación de trabajo entre las instituciones públicas y sus servidores públicos se entiende establecida mediante nombramiento, formato único de movimiento de personal, contrato o por cualquier otro acto que tenga como consecuencia la prestación personal subordinada del servicio y la percepción de un sueldo.*

*Para los efectos de esta ley, las instituciones públicas estarán representadas por sus titulares.”*

*(Énfasis añadido)*

Al respecto, en relación a lo peticionado por la parte recurrente, se determina que es información que obra en el expediente de personal, conforme a lo que dispone el artículo 47, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, el cual establece, que para ingresar al servicio público se requiere, entre otros, presentar una solicitud utilizando la forma oficial que se autorice por la dependencia correspondiente tal como se observa a continuación:

*ARTÍCULO 47. Para ingresar al servicio público se requiere:*

***I. Presentar una solicitud utilizando la forma oficial que se autorice por la institución pública o dependencia correspondiente;***

*II. Ser de nacionalidad mexicana, con la excepción prevista en el artículo 17 de la presente ley;*

*III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, en su caso;*

*IV. Acreditar, cuando proceda, el cumplimiento de la Ley del Servicio Militar Nacional;*

*V. Derogada.*

*VI. No haber sido separado anteriormente del servicio por las causas previstas en el artículo 93 de la presente ley;*

*VII. Tener buena salud, lo que se comprobará con los certificados médicos correspondientes, en la forma en que se establezca en cada institución pública;*

*VIII. Cumplir con los requisitos que se establezcan para los diferentes puestos;*

*IX. Acreditar por medio de los exámenes correspondientes los conocimientos y aptitudes necesarios para el desempeño del puesto; y*

*X. No estar inhabilitado para el ejercicio del servicio público.*

*XI. Presentar certificado expedido por la Unidad del Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el que conste, si se encuentra inscrito o no en el mismo.*

*La institución o dependencia que reciba un certificado en que conste que la persona que se incorpora al servicio público se encuentra inscrito el Registro de Deudores Alimentarios Morosos deberá dar aviso al juez de conocimiento de dicha circunstancia, para los efectos legales a que haya lugar.*

Por su parte, los artículos 48, 49 y 50, refieren lo siguiente:

*ARTÍCULO 48. Para iniciar la prestación de los servicios se requiere:*

***I. Tener conferido el nombramiento, contrato respectivo o formato único de Movimientos de Personal;***

*II. Rendir la protesta de ley en caso de nombramiento; y*

*III. Tomar posesión del cargo.*

***CAPITULO II***

***De los Nombramientos***

*ARTÍCULO 49.- Los nombramientos, contratos o formato único de Movimientos de Personal de los servidores públicos deberán contener:*

1. ***Nombre completo del***
2. ***servidor público;***

***II. Cargo para el que es designado, fecha de inicio de sus servicios y lugar de adscripción****;*

*III. Carácter del nombramiento, ya sea de servidores públicos generales o de confianza, así como la temporalidad del mismo;*

*IV. Remuneración correspondiente al puesto;*

*V. Jornada de trabajo;*

*VI. Derogada;*

*VII. Firma del servidor público autorizado para emitir el nombramiento, contrato o formato único de Movimientos de Personal, así como el fundamento legal de esa atribución.*

*ARTÍCULO 50.- El nombramiento,* ***contrato*** *o formato único de Movimientos de Personal* ***aceptado obliga al servidor público a cumplir con los deberes inherentes al puesto especificado*** *en el mismo y a las consecuencias que sean conforme a la ley, al uso y a la buena fe.*

*Iguales consecuencias se generarán para todos los servidores públicos, cuando la relación de trabajo se formalice mediante un contrato o por encontrarse en lista de raya.*

Es así que, para que un servidor público entre en funciones **debe tener un nombramiento, contrato o formato único de movimientos de personal**, el cual debe obrar en el expediente correspondiente, conforme al artículo 98 fracción XVII, de la Ley anteriormente mencionada refiere que son obligaciones de las instituciones públicas, el **integrar los expedientes de los servidores públicos** y proporcionar las constancias que éstos soliciten para el trámite de los asuntos de su interés en los términos que señalen los ordenamientos respectivos.

Con lo expuesto hasta este punto, se tiene que en el expediente de personal, debe obrar el contrato respectivo, pues a través de este se establece la relación laboral entre los servidores públicos y los Sujetos Obligados.

En consecuencia, se advierte que **EL SUJETO OBLIGADO** no se realizó una correcta búsqueda exhaustiva y razonable de la información ya que sí no contiene contratos en los expedientes del personal, debe obrar documento análogo que dé cuenta de la relación laboral entre el ente recurrido y los servidores públicos que en el laboran.

Por lo tanto, los Sujetos Obligados, en materia de transparencia, en todo momento deben apegar su actuar conforme lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Las funciones que realizan las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados es fundamental para el correcto cumplimiento del derecho de acceso a la información, pues son el vínculo entre los particulares y la información que requieren, además, su obligación es: *realizar, con efectividad, los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de información*[[4]](#footnote-4), es decir, deben otorgar respuestas concisas, contundentes y certeras, además de estar en estricto apego a lo que la normatividad en la materia establece.

Debiendo cumplir con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el artículo 162, mismo del que se inserta su contenido:

***Artículo 162.*** *Las unidades de transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.*

Las unidades de transparencia deberán turnar las solicitudes de acceso a la información a las áreas correspondientes para que estas a su vez, manifestarán lo conducente; situación que no se materializó, puesto que si bien se pronunció el Director de Administración y Finanzas, éste último no le proporcionó al Titular de la Unidad de Transparencia los documentos que colmaran la pretensión del particular.

La búsqueda exhaustiva y razonable de la información con su debida comprobación, es una herramienta que permite brindar mayor certeza a los particulares sobre las acciones que realizan los sujetos obligados para atender las solicitudes de información. Asimismo, con dicha herramienta se refleja el grado de compromiso que tienen como autoridades para el debido cumplimiento y tutela del derecho constitucional y convencionalmente reconocido que es el derecho de acceso a la información.

Es necesario que los Sujetos Obligados, a efecto de brindar certeza jurídica y correcta tutela al derecho accionado por los particulares realicen una correcta búsqueda en todas las áreas que de acuerdo a sus funciones atribuciones y competencias deban generar, administrar y poseer la información de interés para los particulares.

En consecuencia, se **ORDENA** al **SUJETO OBLIGADO** realizar una nueva búsqueda exhaustiva y razonable, para que de esta forma al no contener en los expedientes del personal los contratos peticionados, proporcione los documentos análogos que den cuenta de la información solicitada por **EL RECURRENTE,** lo antes expuesto en apego al principio de máxima publicidad y con la finalidad de brindar la mayor certeza al particular.

Ahora bien, si del de la búsqueda exhaustiva y razonable, no se localiza la información por no haberse generado, administrado o simplemente no está en su posesión, **EL SUJETO OBLIGADO** debido a que existe fuente obligacional que lo constriñe a contar con la información solicitada,deberá emitir el acuerdo de inexistencia que apruebe su Comité de Transparencia al respecto; ello de conformidad con los artículos 19, 169 y 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, esto en razón de que existe fuente obligacional que constriñe al ente recurrido a generar un documento que dé cuenta de la relación laboral con sus servidores públicos, ya sea al momento de tomar posesión de su cargo o en su caso estipula una temporalidad, preceptos que se transcriben a continuación:

***“Artículo 19.*** *Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.*

*…*

*Si el sujeto obligado,* ***en el ejercicio de sus atribuciones, debía generar, poseer o administrar la información, pero ésta no se encuentra****, el Comité de transparencia deberá emitir un acuerdo de inexistencia, debidamente fundado y motivado, en el que detalle las razones del por qué no obra en sus archivos.*

***Artículo 49.*** *Los Comités de Transparencia tendrán las siguientes atribuciones:*

*…*

***II.*** *Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados;*

*…*

***XIII.******Dictaminar las declaratorias de inexistencia de la información que les remitan las unidades administrativas y resolver en consecuencia;***

***…***

***Artículo 169.*** *Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia:*

*I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;*

*II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;*

*III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y*

*IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.*

*La Unidad de Transparencia deberá notificarlo al solicitante por escrito, en un plazo que no exceda de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud.*

*Este plazo podrá ampliarse hasta por otros siete días hábiles, siempre que existan razones para ello, debiendo notificarse por escrito al solicitante.*

***Artículo 170.******La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la existencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma****.”*

(Énfasis añadido)

En observancia a lo anterior, resultan aplicables los criterios de interpretación en el orden administrativo número 0003-11 y 004-11 emitidos por Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que a la letra dicen:

***“CRITERIO 003-11.***

***“INEXISTENCIA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.*** *La interpretación sistemática de los artículos 29 y 30, fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, permite concluir que la inexistencia de la información en el derecho de acceso a la información pública conlleva necesariamente a los siguientes supuestos:*

*a) La existencia previa de la documentación y la falta posterior de la misma en los archivos del Sujeto Obligado, esto es, la información se generó, poseyó o administró —cuestión de hecho— en el marco de las atribuciones conferidas al Sujeto Obligado, pero no la conserva por diversas razones (destrucción física, desaparición física, sustracción ilícita, baja documental, etcétera).*

*b)* ***En los casos en que por las atribuciones conferidas al Sujeto Obligado éste debió generar, administrar o poseer la información, pero en incumplimiento a la normatividad respectiva no llevó a cabo ninguna de esas acciones.***

*En ambos casos, el Sujeto Obligado deberá hacer del conocimiento del solicitante las razones que explican la inexistencia, mediante el dictamen debidamente fundado y motivado emitido por el Comité de Información y con las formalidades legales exigidas por la Ley de Transparencia.*

***CRITERIO 004/2011***

***INEXISTENCIA. DECLARATORIA DE LA. ALCANCES Y PROCEDIMIENTOS.*** *De la interpretación de los artículos 29 y 30, fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se concluye que cuando el Titular de la Unidad de Información no localice la documentación solicitada, a pesar de haber sido generada, poseída o administrada por el Sujeto Obligado, turnará la solicitud al Comité de Información el cual es el único competente para conocer y deliberar mediante resolución el dictamen de declaratoria de inexistencia, la cual tiene como propósito que el particular tenga la certeza jurídica de que el Sujeto Obligado realizó una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información en los archivos a cargo. En consecuencia, es deber del Comité de Información instruir una búsqueda exhaustiva a todas y cada una de las áreas que integran orgánica o funcionalmente al Sujeto Obligado, para localizar los documentos que contengan la información materia de una solicitud, así como la de supervisar que esa búsqueda se lleve a cabo en todas y cada una de las áreas mencionadas. Dicha búsqueda exhaustiva implicará que el Comité acuerde las medidas pertinentes para la debida localización de la información requerida dentro de la estructura del Sujeto Obligado y, en general, el de adoptar cualquier otra previsión que considere conducente para tales efectos y velar por la certeza en el derecho de acceso a la información.*

*Bajo el entendido de que dicha búsqueda exhaustiva permitirá dos determinaciones:*

*a) Que se localice la documentación que contenga la información solicitada y de ser así la información pueda entregarse al solicitante en la forma en que se encuentra disponible, o*

*b) Que no se haya encontrado documento alguno que contenga la información requerida, por lo que agotadas las medidas necesarias de búsqueda de la información y de no encontrarla, el Comité de Información deba emitir el dictamen de declaratoria de inexistencia y notificarlo al interesado.*

*Aunado a lo anterior, en el dictamen de declaratoria de inexistencia el Comité de Información deberá motivar o precisar las razones por las que se buscó la información, las áreas en las que se instruyó la búsqueda, las respuestas otorgadas por los Servidores Públicos Habilitados y en general, todas aquéllas circunstancias que se tomaron en cuenta para llegar a determinar que la información requerida no obra en los archivos a cargo.”*

(Énfasis añadido)

Por lo anterior, no se omite comentar que para el caso de que el o los documentos de los cuales se ordena su entrega, contengan datos personales susceptibles de ser testados, deberán ser entregados en **versión pública**; pues, el derecho de acceso a la información pública tiene como limitante el respeto a la intimidad y a la vida privada de las personas, es por ello que este Instituto debe cuidar que los datos personales que obren en poder de los Sujetos Obligados sean protegidos y únicamente se den a conocer aquéllos que abonen a la rendición de cuentas y a la transparencia en el ejercicio de las atribuciones que tienen conferidas. De este modo, en armonía entre los principios constitucionales de máxima publicidad y de protección de datos personales, la ley permite la elaboración de versiones públicas en las que se suprima aquella información relacionada con la vida privada de los particulares.

A este respecto, los artículos 3, fracciones IX, XX, XXI y XLV; 51 y 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios establecen:

***“Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

***IX.******Datos personales:*** *La información concerniente a una persona, identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;*

***XX.******Información clasificada:*** *Aquella considerada por la presente Ley como reservada o confidencial;*

***XXI.******Información confidencial****: Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos;*

***XLV. Versión pública:*** *Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso.*

***Artículo 51.*** *Los sujetos obligados designaran a un responsable para atender la Unidad de Transparencia, quien fungirá como enlace entre éstos y los solicitantes. Dicha Unidad será la encargada de tramitar internamente la solicitud de información* ***y tendrá la responsabilidad de verificar en cada caso que la misma no sea confidencial o reservada.*** *Dicha Unidad contará con las facultades internas necesarias para gestionar la atención a las solicitudes de información en los términos de la Ley General y la presente Ley.*

***Artículo 52.*** *Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su caso, la información entregada, así como las resoluciones a los recursos que en su caso se promuevan serán públicas, y de ser el caso que contenga datos personales que deban ser protegidos se podrá dar su acceso en su versión pública, siempre y cuando la resolución de referencia se someta a un proceso de disociación, es decir, no haga identificable al titular de tales datos personales.”*

(Énfasis añadido)

Así, los datos personales que obren en poder de los Sujetos Obligados deben estar protegidos, adoptando las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas necesarias para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, considerando además, que conforme al principio de finalidad, todo tratamiento de datos personales que efectúen, deberá estar justificado en la Ley, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 22, párrafo primero con relación con el 38 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, los cuales se transcriben para mayor referencia:

***“Artículo 22.*** *Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera.*

***Artículo 38.*** *Con independencia del tipo de sistema y base de datos en el que se encuentren los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable adoptará, establecerá, mantendrá y documentará las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, a través de controles y acciones que eviten su daño, alteración, pérdida, destrucción, o el uso, transferencia, acceso o cualquier tratamiento no autorizado o ilícito, de conformidad con lo dispuesto en los lineamientos que al efecto se expidan.****”***

De este modo, en armonía entre los principios constitucionales de máxima publicidad y de protección de datos personales, la Ley de la materia permite la elaboración de versiones públicas en las que se suprima aquella información relacionada con la vida privada de los particulares toda vez que ésta tiene por objeto proteger datos personales, entendiéndose por tales, aquéllos que hacen identificable a una persona.

Lo anterior es así, en virtud de que toda la información relativa a una persona física o jurídico colectiva que le pueda hacer identificada o identificable constituye un dato personal en términos del artículo 4, fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; por consiguiente, se trata de información confidencial que debe ser protegida por **EL SUJETO OBLIGADO,** por lo que, todo dato personal susceptible de clasificación debe ser protegido.

La finalidad de la versión pública de la información, es salvaguardar la vida, integridad, seguridad, patrimonio y privacidad de las personas; de tal manera que todo aquello que no tenga por objeto proteger lo anterior, es susceptible de ser entregado; en otras palabras, la protección de datos personales, entre ellos el del patrimonio y su confidencialidad, es una derivación del derecho a la intimidad.

Asimismo, es importante señalar que dicha clasificación se tiene que efectuar mediante la forma y formalidades que la ley de la materia impone; es decir, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado, de su Comité de Transparencia, en términos de los artículos 49, fracción VIII y 132, fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como los numerales Segundo, fracción XVIII, y del Cuarto al Décimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, que literalmente expresan:

***Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios***

***“Artículo 49.*** *Los Comités de Transparencia tendrán las siguientes atribuciones:*

***VIII.*** *Aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información;*

***Artículo 132.*** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

***I.*** *Se reciba una solicitud de acceso a la información;*

***II.*** *Se determine mediante resolución de autoridad competente; o*

*III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.****”***

***“Segundo.-*** *Para efectos de los presentes Lineamientos Generales, se entenderá por:*

***XVIII.******Versión pública:*** *El documento a partir del que se otorga acceso a la información, en el que se testan partes o secciones clasificadas, indicando el contenido de éstas de manera genérica, fundando y motivando la reserva o confidencialidad, a través de la resolución que para tal efecto emita el Comité de Transparencia.*

***Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información***

***Cuarto.*** *Para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera total o parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General.*

*Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia.*

***Quinto.*** *La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en la Ley General, la Ley Federal y leyes estatales, corresponderá a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación de la información ante una solicitud de acceso o al momento en que generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, observando lo dispuesto en la Ley General y las demás disposiciones aplicables en la materia.*

***Sexto.*** *Se deroga.*

***Séptimo.*** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

***I.*** *Se reciba una solicitud de acceso a la información;*

***II.*** *Se determine mediante resolución del Comité de Transparencia, el órgano garante competente, o en cumplimiento a una sentencia del Poder Judicial; o*

***III.*** *Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y las correspondientes de las entidades federativas.*

*Los titulares de las áreas deberán revisar la información requerida al momento de la recepción de una solicitud de acceso, para verificar, conforme a su naturaleza, si encuadra en una causal de reserva o de confidencialidad.*

***Octavo.*** *Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial.*

*Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.*

*En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación deberá comprender el análisis de la prueba del daño a que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, en relación con el artículo trigésimo tercero de los presentes lineamientos, así como las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva.*

***Noveno.*** *En los casos en que se solicite un documento o expediente que contenga partes o secciones clasificadas, los titulares de las áreas deberán elaborar una versión pública fundando y motivando la clasificación de las partes o secciones que se testen, siguiendo los procedimientos establecidos en el Capítulo IX de los presentes lineamientos.*

***Décimo.*** *Los titulares de las áreas, deberán tener conocimiento y llevar un registro del personal que, por la naturaleza de sus atribuciones, tenga acceso a los documentos clasificados. Asimismo, deberán asegurarse de que dicho personal cuente con los conocimientos técnicos y legales que le permitan manejar adecuadamente la información clasificada, en los términos de la Ley General de Archivo, Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos y demás normatividad aplicable.*

*En ausencia de los titulares de las áreas, la información será clasificada o desclasificada por la persona que lo supla, en términos de la normativa que rija la actuación del sujeto obligado.*

***Décimo primero.*** *En el intercambio de información entre sujetos obligados para el ejercicio de sus atribuciones, los documentos que se encuentren clasificados deberán llevar la leyenda correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VIII de los presentes lineamientos.****”***

De este modo, en armonía entre los principios constitucionales de máxima publicidad y de protección de datos personales, la ley permite la elaboración de versiones públicas en las que se suprima aquella información relacionada con la vida privada de los particulares.

Consecuentemente, se destaca que la versión pública que elabore **EL SUJETO OBLIGADO** debe cumplir con las formalidades exigidas en la Ley, por lo que para tal efecto emitirá el **Acuerdo del Comité de Transparencia** en términos de los artículos 122 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, con el cual sustentará la clasificación de datos y con ello la "versión pública" de los documentos materia de la solicitud, ya que no hacerlo implica que lo entregado no es legal ni formalmente una versión pública, sino más bien una documentación ilegible, incompleta o tachada; pues no señalar las razones por las que no se aprecian determinados datos -ya sea porque se testan o suprimen- deja al solicitante en estado de incertidumbre, al no conocer o comprender porque no aparecen en la documentación respectiva, es decir, si no se exponen de manera puntual las razones de ello se estaría violentando desde un inicio el derecho de acceso a la información del solicitante.

En otro tema, no se omite comentar que aún y cuando se advierte que el particular señaló el requerimiento en **copias certificadas**, es importante hacer del conocimiento que **EL SUJETO OBLIGADO** podrá proporcionar otras modalidades para la entrega de la información, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (**SAIMEX**); preferentemente electrónicas como Disco Compacto, o un dispositivo de almacenamiento o incluso copias simples o certificadas si se acredita la imposibilidad de entregarlas en medio electrónico, todo esto, previo pago de los derechos correspondientes o de manera gratuita para el caso de que los particulares proporcionen los dispositivos electrónicos cuando la información se entregue en CD, DVD o USB.

Ahora bien, no pasa inadvertido para este Órgano Garante que la solicitud versa en solicitar la información de la temporalidad específica a los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, en virtud de ello, es preciso señalar que dicha temporalidad no es óbice para que los documentos no obren en los archivos del **SUJETO OBLIGADO**, pues éste tiene la obligación de resguardar los documentos que se generen en el ejercicio de sus facultades obligacionales y competencias.

Por lo tanto, es conveniente señalar los siguientes conceptos de acuerdo a los lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos, emitidos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), cuyo objeto es *“establecer las políticas y criterios para la sistematización y digitalización, así como para la custodia y conservación de los archivos en posesión de los sujetos obligados, con la finalidad de garantizar la disponibilidad, la localización eficiente de la información generada, obtenida, adquirida, transformada y contar con sistemas de información, ágiles y eficientes*”, al tenor de lo siguiente:

***Cuarto.***

*(…)*

***II. Archivo:*** *El conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte, que son producidos o recibidos por los sujetos obligados o los particulares en el ejercicio de sus atribuciones o en el desarrollo de sus actividades;*

***III. Archivo de concentración:*** *La unidad de la administración de documentos cuya consulta es esporádica y que permanecen en ella hasta su transferencia secundaria o baja documental;*

***IV. Archivo histórico.*** *La unidad responsable de la administración de los documentos de conservación permanente y que son fuente de acceso público;*

***V. Archivo de trámite:*** *La unidad responsable de la administración de documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones de una unidad administrativa, los cuales permanecen en ella hasta su transferencia primaria;*

***VIII. Baja documental.*** *La eliminación de aquella documentación que haya prescrito en sus valores administrativos, legales, fiscales, contables, y que no contenga valores históricos;*

*(…)*

***X. Ciclo vital del documento:*** *La etapas de los documentos desde su producción o recepción hasta su baja o transferencia a un archivo histórico;*

*(…)*

***XLVIII. Transferencia documental:*** *El traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de un archivo de trámite al archivo de concentración (transferencia primaria) y de expedientes que deben conservarse de manera permanente, del archivo de concentración al archivo histórico (transferencia secundaria);*

Por lo expuesto, se colige que los documentos cuentan con un ciclo vital, entendiéndose como las etapas a las que se someten desde su producción o recepción hasta su baja o transferencia a un archivo histórico; siendo el Archivo de Trámite la primera etapa, en la que se depositan todos los archivos de uso cotidiano y que son necesarios para el ejercicio de las atribuciones de una entidad administrativa, y en la que permanecen hasta su transferencia primaria al Archivo de Concentración; en esta etapa se mantienen los archivos de consulta esporádica y permanecen allí hasta sus transferencia secundaria al Archivo Histórico o su baja documental.

Lineamientos para la Valoración, Selección y Baja de los Documentos, Expedientes y Series de Trámite Concluido en los Archivos del Estado de México, que establece lo siguiente:

***Artículo 20.*** *Los expedientes de trámite concluido y los desclasificados se mantendrán íntegros por un periodo de dos años en los Archivos de Trámite de las Unidades Administrativas. Cumplido este plazo se podrá proceder a su selección preliminar y transferencia al Archivo de Concentración.*

*El periodo señalado se computará a partir del día siguiente a la fecha del documento con el cual se dé por concluido el asunto pro el que los expedientes fueron creados.*

***Artículo 27.****- Las Unidades Administrativas al realizar la transferencia de los expedientes de trámite concluido, señalarán en el Inventario correspondiente los plazos de conservación precaucional de éstos en el Archivo de Concentración. Para determinar el plazo de conservación precaucional deberán considerar el marco legal o administrativo bajo el cual se produjeron o recibieron los documentos y los siguientes períodos:*

1. ***6 años para expedientes con información administrativa****;*
2. ***6 años como mínimo para expedientes con información fiscal y presupuestal contable;***
3. *12 años como mínimo para expedientes con información jurídico-legal, obra pública y activo fijo; y*
4. *Cuando en la legislación se establezcan períodos de conservación mayores a los señalados en las fracciones I, II y III, se considerarán los estipulados en dicha legislación para efectos de realización del proceso de selección final.*
5. *Cuando las Unidades Administrativas no indique el plazo de conservación precaucional de sus expedientes en el Inventario correspondiente, los Archivos de Concentración podrán rechazar la transferencia de los expedientes.*

En apego de lo anterior, se tiene que una vez que los documentos generados se consideran como trámite concluido, pasan a formar parte del Archivo de Trámite por dos años; concluido el plazo, se transfieren al Archivo de Concentración para mantenerse allí por seis años cuando los expedientes contengan información administrativa; y una vez que concluye dicho periodo, los documentos pueden causar baja documental o bien, formar parte del Archivo Histórico.

En consecuencia, este Órgano Garante considera que, para el caso de que **EL SUJETO OBLIGADO** no localice parte o la totalidad de los documentos que se ordenan en el presenta asunto en los archivos del **Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de Los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán Izcalli denominado OPERAGUA, O.P.D.M.**, y a efecto que le otorguen la certeza jurídica al particular de haber realizado la búsqueda correspondiente o en su caso la baja documental respectiva en ejercicio de sus atribuciones, **EL SUJETO OBLIGADO** deberá emitir su Acuerdo de Inexistencia en términos de los artículos 19, 169 y 170, de la Ley de la materia, anteriormente referidos.

Finalmente, en razón de lo anteriormente expuesto, éste Instituto estima que las razones o motivos de inconformidad hechos valer por **EL RECURRENTE** devienen **fundadas**; motivo por el cual, este Órgano Garante determina **MODIFICAR** la respuesta otorgada por **EL SUJETO OBLIGADO** en la solicitud de acceso a la información que dio trámite al presente Recurso de Revisión, para que de esta forma se realice la entrega de la información peticionada por **EL RECURRRENTE**, en **versión pública,** privilegiando ofrecer otras modalidades de entrega tales como, **correo electrónico**, **ligas electrónicas,** o en su caso, **USB** y/o **disco compacto**, aunado a que existe la posibilidad de ofrecer envío mediante correo certificado, sin embargo esto último tendría un costo, de tal manera que **EL SUJETO OBLIGADO** debe ofrecer otras modalidades mismas que deberá informarle al **RECURRENTE** para que en caso de que así lo decida, **sea la parte interesada quien proporcione dichos medios electrónicos y la entrega de la información sea gratuita**.

Por lo anterior, el Sujeto Obligado deberá hacer el conocimiento de la Particular que la información estará disponible, por un plazo mínimo de sesenta días naturales, a partir de la fecha de la puesta a disposición, en términos del segundo párrafo del numeral citado.

Es importante hacer mención que, al haberse interpuesto el Recurso de Revisión que nos ocupa, el plazo de sesenta días hábiles en los que debe contar con la información solicitada, empezarán a computarse de nueva cuenta a partir del día hábil siguiente al en que se notifique la presente Resolución y, sí dentro del transcurso del término señalado, el Particular acude por la información, se levantará un acta de hechos, misma que debe ser remitida a este Instituto por conducto de la Secretaría Técnica del Pleno junto con el acuse de recibo de la información; sin embargo, sí una vez fenecido el plazo no acudiera por los documentos ordenados, el Sujeto Obligado dará por concluida la solicitud y podrá, de ser el caso, realizar la destrucción del material correspondiente; situación que también deberá informar a este Instituto, por la misma vía antes precisada.

Así, con fundamento en lo previsto en los artículos 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y los artículos 2, fracción II, 9, 29, 36, fracciones I y II, 176, 178, 179, 181, 185, fracción I, 186 y 188, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Pleno:

**RESUELVE**

**PRIMERO**. Resultan **fundadas** las razones o motivos de inconformidad planteadas por **EL RECURRENTE**, en términos del Considerando **QUINTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se **MODIFICA** la respuesta otorgada por **EL** **SUJETO OBLIGADO** a la solicitud de acceso a la información que dio origen al Recurso de Revisión **03097/INFOEM/IP/RR/2023** y se **ORDENA** que en términos del Considerando **QUINTO** de esta Resolución proporcione al **RECURRENTE** en **copias certificadas y** en todas las modalidades que permita la documentación, tales como, disco compacto, dispositivo de almacenamiento, consulta directa, copias simples, con posibilidad de entrega en la Unidad de Transparencia o a domicilio por correo certificado, previo pago de los derechos correspondientes, en versión pública, lo siguiente:

***a)*** *Recibos de nómina de los servidores públicos adscritos al* ***SUJETO OBLIGADO*** *expedidos en los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.*

*b) El documento mediante el cual se haya formalizado la relación laboral entre* ***EL SUJETO OBLIGADO*** *y los servidores públicos que ofrecieron sus servicios en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.*

*Debiendo notificar al* ***RECURRENTE*** *el acuerdo de clasificación de la información que emita el comité de transparencia, con motivo de la* ***versión pública****.*

*Ahora bien, respecto a las* ***copias certificadas*** *solicitadas por* ***EL RECURRENTE,*** *se deberá a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense* ***(SAIMEX)****, indicar el mecanismo y/o procedimiento que tendrá que seguir para acceder a la documentación incluyendo la certificada, es decir, los pasos para realizar el pago de derechos, en caso de ser procedentes, y la manera de obtener la información tal como domicilio de la Unidad de Transparencia, días y horarios de atención, así como el nombre del servidor público que le atenderá.*

*Asimismo, deberá señalarle que podrá acceder de manera gratuita a la información si proporciona el medio electrónico y recoge la información en la Unidad de Transparencia.*

*Para el caso de que la información de la que se ordena su entrega en el inciso b), no obre en sus archivos,* ***EL SUJETO OBLIGADO*** *deberá emitir el Acuerdo de Inexistencia en términos de los artículos 49, fracciones II y XIII, 169 y 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.*

**TERCERO.** **NOTIFÍQUESE**vía **SAIMEX** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO**, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente, y se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III y el título noveno, capítulo primero de la referida Ley de Transparencia.

**CUARTO. Notifíquese** al **RECURRENTE** la presente resolución vía **SAIMEX.**

**QUINTO.** **Hágase del conocimiento** al **RECURRENTE** que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, podrá impugnarla vía Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

**SEXTO**. De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el Sujeto Obligado de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.---------------------------------------------------------------------------------------------------

SCMM/AGZ/DEMF/CCA

1. ***Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios***

   ***“Artículo 49.*** *Los Comités de Transparencia tendrán las siguientes atribuciones:*

   ***(…)***

   ***XII. Emitir las resoluciones que correspondan para la atención de las solicitudes de información;***

   ***(…)”*** [↑](#footnote-ref-1)
2. Ver tesis con los siguientes rubros: “COPIAS CERTIFICADAS, OBLIGACIÓN DE EXPEDIR LAS” con localización: Tesis 265601. . Segunda Sala. Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Volumen CIX, Tercera Parte, Pág. 14; “COPIAS. SÓLO TIENEN VALOR INDICIARIO AUN CUANDO ESTÉN CERTIFICADAS, SI NO HAY CERTEZA DE QUE SE COTEJARON CON LOS ORIGINALES”, con localización: 192413, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Febrero de 2000, Página: 7; “COPIAS, FACULTAD DE CERTIFICACIÓN DE. LA TIENEN LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, SI LA LEY CORRESPONDIENTE LOS AUTORIZA PARA ELLO, RESPECTO DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN SUS ARCHIVOS, SOBRE ASUNTOS DE SU COMPETENCIA”, con localización: 196139. I.6o.C.40 K. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Junio de 1998, Pág. 631. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México, Artículo 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Fracción IV. Artículo 53. Ibídem. [↑](#footnote-ref-4)